



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA



ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2 **002 - A CORUÑA**

Modelo: N66070

PLAZA DE GALICIA, 1. 15004 A CORUÑA

Teléfono: 981185787 981182197 **Fax:** DIR 3 J00015134

Correo electrónico: sala2.contenciosoadministrativo.tsxg@xustiza.gal

Equipo/usuario: MB

N.I.G: 15030 33 3 2023 0000734

Procedimiento: PMU PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARISIMAS 0004096 /2023 0001 PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0004096 /2023

Sobre DOMINIO PUBLICO Y BIENES PATRIMONIALES

De D/ña. FUNDACIÓN MONTESCOLA

Abogado: MIGUEL ALBERTO LOPEZ MORIÑIGO

Procurador: LUIS ALBERTO DEQUIDT MONTERO

Contra D/ña. AUGAS DE GALICIA

Abogado: LETRADO DE LA COMUNIDAD

Procurador:

A U T O

ILMA. SRA. PRESIDENTA:

MARIA AZUCENA RECIO GONZALEZ

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

JOSE ANTONIO PARADA LOPEZ

JULIO-CESAR DIAZ CASALES

ANTONIO MARTINEZ QUINTANAR

En A CORUÑA, a veintiséis de mayo de dos mil veintitrés .

AUTO

HECHOS

ÚNICO.- La representación de Fundación Montescola, interpone recurso contencioso-administrativo contra resolución dictada por el Secretario Xeral Técnico de la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade de data 7 de marzo de 2023 por la que se resuelve en sentido desestimatorio la solicitud de suspensión de la ejecución de la resolución de autorización de vertido al río Pesqueira ou rego de Rabaceiros (cunca da ría de Muros e Noia) de aguas residuales procedentes de una explotación minera de estaño y wolframio localizada en lugar das Minas de San Finx - Vilacova (T.M. Lousame), dictada por Augas de Galicia en 1 de febrero de 2023 en procedimiento con clave XXXX, por la que se resolvió otorgar

autorización de vertido a Tungsten San Finx S.L.. Y mediante otrosí de su escrito, interesa la adopción de medida cautelarísima al amparo del artículo 135 LJCA, consistente en la suspensión de la ejecución de la resolución de autorización de vertido al río Pesqueira ou Rego de Rabaceiros (Cunca da Ría de Muros y Noia) de aguas residuales procedentes de una explotación minera de estaño y wolframio localizada en el Lugar das Minas de San Fins -Vilacova (T.M. Lousame), dictada por Aguas de Galicia en 1 de febrero de 2023 en el procedimiento con clave XXXX.

A los hechos anteriores son de aplicación los siguientes:

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.-Procedencia de denegar la medida cautelar por el cauce del artículo 135 LJCA.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la vigente Ley Jurisdiccional, "1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto:

a) *Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al artículo 130. Contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma resolución el órgano judicial dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente o bien convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o bien celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será recurrible conforme a las reglas generales.*

En cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63.

b) *No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitación del incidente cautelar conforme al artículo 131, durante la cual los interesados no podrán*

solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente artículo.

...".

La parte demandante funda la urgencia en la necesidad de evitar que se produzca un vertido de aguas residuales que, partiendo de lo que considera carencias y errores del proyecto de tratamiento autorizado, puesto que entiende que no toma en consideración los impactos ambientales de los proyectos mineros y de vertido, así como las afecciones a la Rede Natura 2000, entre otros motivos por los que considera que procede la nulidad de la resolución, atendido el grave daño ambiental a las aguas y actividades marisqueras y pesqueras de la ría de Muros-Noia; y se remite a la documental aportada, de entre 2016-2021.

Hemos de partir de que a través del cauce empleado -el del artículo 135 LJCA-, lo que ha de verificarse es si concurren las circunstancias de especial urgencia que exige el precepto, pues de lo contrario habrá de acudirse al cauce ordinario, más garantista en cuanto que permite la intervención de todas las partes haciendo alegaciones y aportando la prueba que consideren precisa, es decir, ha de concurrir una urgencia de mayor intensidad a la que normalmente acompaña a la tramitación de las medidas cautelares en el régimen ordinario que se regulan en los artículos 129 y siguientes de la LJCA, privando del trámite de contradicción.

Tal y como refiere el Tribunal Supremo (Sala 3.^a, Sección 6.^a). Auto de 4 de diciembre de 2017, rec. 652/2017 (ECLI:ES:TS:2017:11347A). *«Esta Sala tiene afirmado en forma constante, al resolver este tipo de incidentes, que los tribunales de este orden jurisdiccional contencioso-administrativo pueden dispensar su tutela cautelarísima (a reserva de su ulterior ratificación, modificación o levantamiento) sin oír a la Administración ni a las partes codemandadas, solo si existe el presupuesto habilitante de presencia de "circunstancias de especial urgencia" en la necesidad de su adopción.*

La tutela cautelarísima inaudita altera parte del artículo 135 de la LJCA solo es posible ante circunstancias que pongan de manifiesto una urgencia excepcional o extraordinaria, esto es,

de mayor intensidad que la normalmente exigible para la adopción de medidas cautelares que, según los trámites ordinarios, se produce al término del incidente correspondiente, con respeto del principio general de audiencia de la otra parte. La LJCA permite que se sacrifique, de manera provisional, dicho principio de contradicción solo cuando las circunstancias de hecho no permitan, dada su naturaleza, esperar ni siquiera a la sustanciación de aquel incidente procesal. La nueva redacción del artículo 135 de la ley jurisdiccional en virtud de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal subraya la "especial urgencia" como presupuesto de su aplicación».

Aplicado al presente supuesto, hemos de partir de que el objeto de recurso no lo es la resolución que autoriza el vertido, sino la denegación por la Administración de la solicitud de que se paralice la ejecución del mismo. Y que esta denegación se produce en marzo, encontrándonos en mayo, por lo que esa urgencia no se evidencia, y la propia parte recurrente viene a confirmar la ausencia de urgencia atendidos los requerimientos efectuados a fin de que aportase toda la documentación precisa y a que hacía referencia en su escrito inicial, además del resto de los presupuestos procesales exigidos legalmente.

A ello ha de añadirse que la apariencia de buen derecho o los perjuicios generales no son argumentos adecuados para tramitar el procedimiento cautelar sumario, por cuanto ha de insistirse en que el presupuesto es, necesariamente, la «especial urgencia» del caso -en el mismo sentido, Tribunal Supremo (Sala 3.ª, Sección 3.ª), Auto de 23 de julio de 2019, rec. 141/2019 (ECLI:ES:TS:2019:8604A). y que los argumentos expuestos no ponen de manifiesto la urgencia sino que se trata de la justificación de una medida cautelar por el cauce ordinario, que ha de tramitarse a través del mismo con audiencia de la parte contraria.

De forma que no se advierte en este caso esa especial urgencia que pueda justificar el obviar el derecho de defensa de la parte contraria, por lo que debe rechazarse la solicitud cautelar instada por el cauce del artículo 135 de la ley jurisdiccional y acordar la tramitación del incidente por el trámite ordinario del artículo 131LJCA, con respeto del principio de contradicción.

De lo anteriormente expuesto cabe concluir que procede la denegación de la medida cautelar instada por el cauce del artículo 135 LJCA.

PARTE DISPOSITIVA

SE DENIEGA la medida cautelar interesada por la representación de Fundación Montescola, en recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución dictada por el Secretario Xeral Técnico de la Consellería de Infraestructuras e Mobilidade de data 7 de marzo de 2023 por la que se resuelve en sentido desestimatorio la solicitud de suspensión de la ejecución de la resolución de autorización de vertido al río Pesqueira ou rego de Rabaceiros (cunca da ría de Muros e Noia) de aguas residuales procedentes de una explotación minera de estaño y wolframio localizada en lugar das Minas de San Finx - Vilacova (T.M. Lousame), dictada por Augas de Galicia en 1 de febrero de 2023 en procedimiento con clave XXXX, por la que se resolvió otorgar autorización de vertido a Tungsten San Finx S.L.; medida solicitada por el cauce del artículo 135 LJCA, consistente en la suspensión de la ejecución de la resolución de autorización de vertido al río Pesqueira ou Rego de Rabaceiros (Cunca da Ría de Muros y Noia) de aguas residuales procedentes de una explotación minera de estaño y wolframio localizada en el Lugar das Minas de San Fins -Vilacova (T.M. Lousame), dictada por Aguas de Galicia en 1 de febrero de 2023 en el procedimiento con clave XXXX.

No se imponen las costas derivadas de este incidente.

Procede la tramitación del incidente de medida cautelar al amparo de lo dispuesto en el artículo 131 LJCA, a cuyo efecto procede dar traslado a la Administración demandada, por plazo de 10 días.

Al segundo otrosí, se tiene por aportada la documental A con su escrito; y no ha lugar a la solicitud de la documental requerida en los apartados B, C, y D, al ser carga de la parte su aportación, de considerarlos precisos atendido el limitado y concreto objeto de la medida cautelar solicitada.

Contra la presente resolución no cabe recurso de reposición (artículo 80 LJCA), ni recurso de casación (artículo 87 LJCA), con relación a la denegación de la medida por el cauce del artículo 135 LJCA.

Esta resolución es susceptible de recurso de reposición, ante este Tribunal y en el plazo de 5 días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada (artículo 79 LJCA), con relación al pronunciamiento sobre el segundo otrosí.

Así lo pronunciamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.